

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Copia exclusivamente para uso personal. Se prohíbe su distribución o reproducción.

Causa nº 932/2015 (Casación). Resolución nº 122685 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 24 de Agosto de 2015

Fecha de Resolución: 24 de Agosto de 2015

Movimiento: ACOGIDA CASACIÓN FONDO, ANULADA SENTENCIA DE

Rol de Ingreso: 932/2015

Rol de Ingreso en Cortes de Apelación: 1837-2011 C.A. de Santiago

Rol de Ingreso en Primer Instancia: -0-0

Emisor: Sala Segunda (Penal)

Id. vLex: VLEX-581034626

Link: <http://vlex.com/vid/c-jose-jara-carro-581034626>

Texto

Contenidos

- [Primero](#)
- [Segundo](#)
- [Tercero](#)
- [Cuarto](#)
- [Quinto](#)
- [Sexto](#)
- [Séptimo](#)
- [Octavo](#)
- [Décimo séptimo](#)
- [Décimo octavo](#)

Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil quince.

Vistos:

En estos antecedentes Rol N° 2182-98, de la Corte de Apelaciones de Santiago, Episodio

“Coelemu” por sentencia de veintinueve de abril de dos mil once, escrita de fojas 3653 a 3934, en lo que interesa a los recursos, se condenó a las siguientes personas por los delitos y a las penas que en cada caso se indica: a).-J.L.A.V., en su calidad de autor del delito de secuestro calificado cometido en la persona de A.V.V. a sufrir la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena más al pago de las costas de la causa; b).- J.R.J.C. como autor del delito de secuestro calificado de L.A.A. a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena más al pago de las costas de la causa; c).- C.A.H., en calidad de cómplice del delito de secuestro calificado de A.V.V. a sufrir la pena de tres años de presidio menor en su grado medio, más accesorias legales de suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa; d).- B.A.B.B., en su calidad de cómplice del delito de secuestro calificado de O.M.L. a sufrir la pena de tres años de presidio menor en su grado medio, más accesorias legales de suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa; e).- S.A.C., R.G.R.S. y M.C.L., por su participación en calidad de encubridores del delito de secuestro calificado de L.A.A., a sufrir cada uno la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, más accesorias legales de suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa.. Por su fracción civil, la indicada sentencia acogió la excepción de incompetencia absoluta del tribunal opuesta por el Fisco de Chile respecto de las demandas civiles deducidas en autos.

Impugnado ese fallo por la vía de los recursos de casación en la forma de las defensas de los condenados J.A.V. y H.R.J., así como por la vía de la apelación por parte de los mismos condenados, del Programa Continuación [Ley 19.123](#), S.A.C., la querellante, B.B.B., M.C.L. y J.J.C., una sala del tribunal de alzada de Santiago, por sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil catorce, escrita a fojas 4373, dictó sobreseimiento definitivo y parcial en la causa respecto de J.R.J.C. y M.C.L., rechazó las nulidades impetradas y revocó la sentencia en cuanto por ella se había acogido la excepción de incompetencia absoluta opuesta por el Consejo de Defensa del Estado y, en su lugar, declaró que se rechazan todas las excepciones opuestas por dicha parte y acogió la demanda civil interpuesta por la familia de la víctima L.A.A. en contra del Fisco de Chile, debiendo esta entidad pagar por concepto de daño moral a los actores las siguientes sumas:

1. - A la cónyuge, doña Eglantina Alegría Osses la suma de \$100.000.000 (cien millones de pesos);
2. - A cada uno de los hijos, J. de la Gloria, M.A., J.A., A.M.P. y J.L., todos de apellidos A.A., la suma de \$20.000.000 (veinte millones de pesos).

En lo demás apelado y consultado, la Corte de Apelaciones confirmó y aprobó respectivamente lo decidido, con las siguientes declaraciones:

A.- Que se reduce la pena impuesta al procesado J.L.A.V. como autor del delito de secuestro calificado de A.V.V. a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y accesorias señaladas en la sentencia de primer grado.

B.- Que el encartado H.O.R.J. es en definitiva condenado como autor del delito de detención ilegal de L.A.A., a la pena de trescientos días de reclusión menor en su grado mínimo, suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y pago de las costas de la causa.

Concurriendo a su respecto los requisitos legales, se le remite condicionalmente la pena impuesta, debiendo permanecer sujeto a vigilancia de la autoridad administrativa que corresponda durante el lapso de UN AÑO, y cumplir con las exigencias contenidas en el [artículo 5](#) de la [Ley 18.216](#), sirviéndole de abono en su caso el lapso de privación de libertad que indica el fallo revisado.

C.- Que S.A.C. y R.G.R.S. quedan en definitiva condenados como autores del delito de secuestro calificado de L.A.A. a sufrir cada uno la pena de CINCO AÑOS Y UN DIA de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y pago de las costas de la causa.

Atendida la extensión de las sanciones impuestas no se les concede, por improcedente, ningún beneficio alternativo y en consecuencia la pena se les contará desde que se presenten o sean habidos, dejándose sin efecto el beneficio que les fuera a ambos otorgado.

Contra ese último pronunciamiento la defensa del enjuiciado J.L.A.V. dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo, como se desprende de fojas 4437 y, por su parte, los representantes de la parte querellante, del Fisco de Chile y del Programa Continuación [Ley N° 19.123](#) dedujeron sendos recursos de casación en el fondo, como aparece de fojas 4382, 4486 y 4529, respectivamente.

A fojas 4586 se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

En cuanto al recurso de casación en la forma:

Primero

Que el recurso de casación en la forma deducido por la defensa de A.V. se sustenta en las causales 6ª y 9ª, ambas del [artículo 541](#) del [Código de Procedimiento Penal](#), al haber sido la sentencia dictada por un tribunal manifiestamente incompetente y con omisión de los elementos mínimos que la ley impone a una sentencia definitiva, relacionando esta última hipótesis con lo dispuesto en el artículo 500 N° 4 del mismo texto legal.

Sostiene que la primera causal invocada se configura ya que los hechos de la causa ocurrieron el 18 de septiembre de 1973 en Penco, Concepción, siendo denunciados como presunta desgracia en la misma ciudad, lo que dio origen a la causa 38.699 en el Tercer Juzgado del Crimen, que la sobreseyó en dos oportunidades, siendo aprobadas ambas resoluciones por la Corte de Apelaciones de esa ciudad. Continúa exponiendo que en el año 2003, la cónyuge de la víctima envió una carta al Ministro señor Alejandro Solís con copia de la causa y, con esos

antecedentes, el ministro dispuso sustraer el conocimiento de los hechos de la competencia del Tercer Juzgado del Crimen de Concepción y acumularlos a la causa 2182/98 como consta de fojas 799 y en el fallo atacado.

Indica que lo decidido vulnera el texto de la ley y el tenor del Antecedente Administrativo N° 17137 de 14 de octubre de 2002 citado por el tribunal para respaldar su actuación, ya que el citado documento no tiene la extensión que le da el señor ministro, sino que expresamente dispone que los jueces nominados deben atenerse al [Código de Procedimiento Penal](#) en la reapertura, acumulación y tramitación de procesos, lo que ha sido vulnerado porque se restó competencia al juez natural. Lo anterior configura la causal porque la competencia estaba determinada, de manera que la acumulación dispuesta por el ministro de fuero es nula absolutamente por infracción de ley, violentando el [artículo 157](#) del [Código Orgánico de Tribunales](#), vulnerando el [artículo 96](#) del [Código de Procedimiento Civil](#), aplicable en atención a lo dispuesto en el [artículo 43](#) del [Código de Procedimiento Penal](#), ya que de haber sido procedente la acumulación, correspondía que los antecedentes recibidos por el Ministro señor Solís fueran enviados y acumulados a la causa más antigua, esto es, la tramitada por el Tercer Juzgado de Crimen de Concepción.

Denuncia que la Corte de Apelaciones ha rechazado la causal correlativa deducida, señalando que la incompetencia fue materia de excepción de previo y especial pronunciamiento, desechada y confirmada por el tribunal de alzada respectivo, lo que carece de sentido ya que esas fueron gestiones ejercidas para preparar los recursos. Asimismo, el tribunal hace una apreciación incompleta de lo argumentado al fundar la causal, omitiendo hacerse cargo de las reglas legales que se han dado por infringidas, aseverando falsamente que su parte se ha fundado en la competencia militar, lo que no se ha alegado.

Segundo

Que en segundo lugar, denuncia la configuración de la causal 9ª del [artículo 541](#), en relación con lo dispuesto en el [artículo 500](#) N° 4, ambos del [Código de Procedimiento Penal](#), ya que el fallo no contiene ni una consideración que se refiera al secuestro de don A.V. por el que fue condenado su parte, señalando que ninguna de las referencias que la sentencia realiza al caso en comento permite dar por probado el hecho ni se ha hecho cargo de sus defensas.

Tercero

Que de la manera propuesta, las causales de invalidación formal serán rechazadas, ya que los hechos indicados no la configuran.

En efecto, la primera de ellas será desestimada en atención a que en su formulación se ha desatendido que, como acertadamente se hizo presente al resolver la excepción de previo y especial pronunciamiento propuesta por la defensa del recurrente, en autos obra querella criminal en contra de una persona que gozaba, al tiempo de su interposición, de fuero, situación que, de acuerdo a lo dispuesto en el [artículo 168](#) en relación con el [artículo 164](#), ambos del [Código Orgánico de Tribunales](#) de la época, alteró los factores naturales de determinación de

competencia llamados a regir en el caso de autos, motivando la designación de un Ministro, que fue sucedido por quien finalmente dictó la sentencia de primera instancia.

Dicha situación, entonces, otorga pleno sustento jurídico al cambio del tribunal a cargo de la instrucción del sumario y tramitación de la fase plenaria, situación que necesariamente acarrea la alteración del llamado a conocer en segundo grado de este proceso, aunque – como correctamente se indica en el proceso- haya fallecido la persona aforada, atento a lo dispuesto en el artículo 109 del Código ya citado.

Cuarto

Que, por su parte, la causal 9ª de nulidad deducida tampoco será admitida, ya que contrariamente a lo que se señala en el recurso, para el asentamiento de los hechos por los cuales se ha emitido decisión de condena respecto de su parte obran los antecedentes plurales reseñados en el motivo 13º de la sentencia de primer grado y que la de segunda instancia ha hecho suyos, los que analizados conforme los artículos [459](#) y [488](#) del [Código de Procedimiento Penal](#) permitieron a los jueces de la instancia asentar los hechos consignados en el motivo 14º, que en su apartado I comprende aquellos materia de la atribución de responsabilidad del recurrente. A su turno, la participación de A.V. ha sido establecida sobre la base de los elementos de convicción reseñados en el motivo 31º, respecto de los cuales se concluyó en el considerando 32º que reúnen los requisitos del [artículo 459](#) del [Código de Procedimiento Penal](#) (los testigos) y los documentos y presunciones los consignados en el artículo 488 del mismo cuerpo de leyes, permitiendo tener por demostrada la participación del acusado J.L.A.V. en calidad de autor del delito de secuestro calificado por el cual se le ha condenado.

Asimismo, sus defensas se abordaron en el motivo 50º, 51º, 52º y 53º (amnistía), 54º, 55º y 56º (prescripción), 57º (falta de participación), 58º y 59º (recalificación a detención ilegal), 62º (eximente de responsabilidad penal del [artículo 10](#) N° 10 del [Código Penal](#)), 63º, 66º 67º, 68º, 69º y 70º (modificadorias de responsabilidad penal), dándose respuesta a los requerimientos que el legislador impone para las sentencias definitivas, los que son de carácter esencialmente objetivo, de manera que no corresponde en esta sede decidir sobre el valor o la legalidad de sus afirmaciones, aquilatar su mérito intrínseco o el valor de convicción que deba atribuírseles, como pretende el recurso que se revisa.

En cuanto a los recursos de casación en el fondo:

Quinto

Que en el caso en estudio, mediante los recursos de fojas 4382, 4437 y 4529 se han impugnado los fundamentos de la calificación jurídica de los hechos correspondientes a las víctimas L.A.A. y A.V.V., solicitando A.V. que se aplique en su caso la solución dada para H.R.J. al asentar el título de imputación en el delito perpetrado respecto de L.A.A., esto es, condena por detención ilegal; mientras que la parte querellante y el Programa Continuación [Ley 19.123](#) han postulado que el título para condenar a R.J. sea secuestro calificado. Por ello, considerando que el

basamento de lo pedido por uno configura el error de derecho denunciado por los otros, sin perjuicio de las particularidades fácticas de cada caso, se procederá a su análisis conjunto una vez explicitados los fundamentos de cada recurso.

Sexto

Que en el otrosí de su escrito de fojas 4437 la defensa de A.V. denuncia la configuración de la causal 2ª del [artículo 546](#) del [Código de Procedimiento Penal](#), señalando que se han subsumido los hechos en que habría participado su representado en el delito de secuestro calificado y aplicado la pena correspondiente, en circunstancias que, de no mediar error, se habría concluido que su conducta, si es que efectivamente existió (ya que siempre ha sostenido su inocencia), era reprochable penalmente en calidad de autor de delito de detención ilegal, previsto en el [artículo 148](#) del [Código Penal](#), atendida su calidad de empleado público.

De esta manera, sostiene que se ha incurrido en error de derecho al no hacer regir los [artículos 148](#) del [Código Penal](#), 254 N° 3, 260 N° 4 en relación con el artículo [156 inciso 3°](#), [263](#) N° 3, 265, 267, 269, 270, 291, 251 a 272, 278 y 280 a 305 del [Código de Procedimiento Penal](#), aplicando indebidamente en la decisión de lo debatido el [artículo 141](#) del [Código Penal](#), ya que corresponde extender a su caso la doctrina expresada respecto de la víctima A.A. en relación a R.J., reconociendo que unos mismos hechos dan lugar a delitos distintos, siendo el primero el de detención ilegal y luego el de desaparición forzada, en el que no cabe responsabilidad alguna a su defendido.

Hace presente que su parte tenía la calidad de teniente de Carabineros y habría participado en la detención de la víctima trasladándolo a la unidad policial, donde fue visto por terceros sin que se conozca su paradero posterior, por lo que de acuerdo a la legislación vigente de la época, la privación de libertad de una persona terminaba para el aprehensor cuando entregaba al afectado en el cuartel policial, con independencia del hecho que la detención fuera legal o no. Así, entonces, registrado el detenido, éste pasaba a ser responsabilidad del oficial o suboficial de guardia, conforme los artículos [265](#), [267](#), [269](#), [270](#) y [291](#) del [Código de Procedimiento Penal](#), por lo que, en el caso de concluir que su parte haya participado en los hechos imputados, su conducta habría sido la de una detención en ejercicio de las facultades del [artículo 254](#) N° 3 o del 260, en relación con el [artículo 267](#), todos del [Código de Procedimiento Penal](#), sin que la desaparición posterior de la víctima sea de su responsabilidad, de manera que a ella ha debido ajustarse la decisión de condena.

Séptimo

Que por su parte, el Programa Continuación [Ley 19.123](#) denuncia la configuración de la causal 2ª del [artículo 546](#) del [Código de Procedimiento Penal](#), por la decisión de la Corte de Apelaciones de entender que se ha verificado por H.R.J. una detención ilegal y no un secuestro agravado en la persona de L.A.. Postula, al efecto, que la detención de A.A. no lo fue con dolo de detención, sino de secuestro, por lo que entender que la representación delictiva de sus captores quedó restringida al gesto físico de la aprehensión de la víctima ignora el contexto en que ésta se produce. A.A. había sido alcalde de la comuna de Coelemu. Era militante

comunista, concitaba apoyo de la comunidad en una visión de sociedad distinta a la que se entendía como válida por el régimen militar. Por ello, su detención física el 30 de abril de 1974, lo fue cuando la dictadura llevaba 8 meses en el poder, había cientos de personas desaparecidas y ejecutadas. Ella, además, se produce en conjunto con la de 20 personas, muchas de las cuales fueron remitidas para su tortura a la Base Naval de Talcahuano. Incluso la SICAR en Concepción operaba sobre la base de dicha estructura. Todo esto permite circunstancializar y presumir que la detención no se produjo desplegando la conducta del [artículo 148](#), sino la del 141 inciso 3°, ambos del [Código Penal](#), sin que exista ningún elemento en la sentencia que desvirtúe la presunción de representación que el sentenciador de primera instancia entiende respecto de R.J.. Esto le permite sostener la infracción de las normas sustantivas citadas: el [artículo 1](#) del [Código Penal](#), al asignar una pena distinta de la consagrada para el delito cometido, tornando abstracta la conducta del acusado sin justificación fáctica ni legal; el artículo 15 del mismo texto, al vincular la categoría jurídica a la constatación de una cronología, sin considerar la concurrencia subjetiva de Rojas a ese despliegue; el artículo 18 porque la calificación dada vuelve inconsistente la relación de equivalente que el legislador considera esencial, desatendiendo que el hecho acreditado es propio del [artículo 141 inciso 3°](#), todos del [Código Penal](#), por lo que termina solicitando declarar que el delito cometido por R.J. en la persona de L.A.A. es secuestro con grave daño, consumado, previsto en el [artículo 141 inciso 3°](#) del [Código Penal](#) y que le corresponde la sanción de presidio mayor, en toda la extensión posible.

A su turno, la querellante, sobre la base de similares fundamentos, también denuncia la configuración de la causal 2ª del [artículo 546](#) del [Código de Procedimiento Penal](#) por la calificación dada en segunda instancia al delito de que fue víctima don L.A.A., agregando que lo decidido lo ha sido con infracción de las leyes reguladoras de la prueba, esto es, los artículos [108](#), [109](#), [457](#), [459](#), [464](#) y [488](#) N° 1 y 2 del [Código de Procedimiento Penal](#), en relación con los [artículos 15](#) N° 1 y 141 del [Código Penal](#), ya que se ha desconocido el valor de las pruebas que se produjeron en el proceso, denunciando también la concurrencia de la causal 7ª de la primera norma citada.

Octavo

Que la sentencia atacada ha establecido como hechos de la causa, en lo pertinente al recurso, los que siguen:

Funcionarios de Carabineros detuvieron, sin orden judicial o administrativa, en reiteradas oportunidades, a L.B.A.A., de 31 años de edad, era casado, tenía cinco hijos. Había sido Alcalde de Coelemu y militaba en el Partido Comunista. Fue llevado a T. y a la Isla Quiriquina y aprehendido, ilegítimamente, por última vez, el 30 de abril de 1974 por Carabineros de Coelemu y trasladado a la 4ª Comisaría de Concepción, donde se le vio recluido, en malas condiciones físicas, producto de los golpes recibidos, sin que los jefes del recinto permitieran darle atención médica, perdiéndose todo rastro suyo hasta la fecha, sin que el privado de libertad haya tomado contacto con sus familiares, realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción.

En relación a la víctima A.V.V.:

A.S. V.V., de 45 años de edad, era casado y tenía 4 hijos, trabajaba como taxista, era militante del Partido Socialista y fue detenido en su domicilio, ilegítimamente, sin motivo alguno, el día 18 de septiembre de 1973, por el Teniente de C.J.L. A.V., los carabineros F.C.M., C.A.B.P. y el civil C.A.A., quien manejaba un automóvil marca “Dodge” y llevado hasta la Comisaría de P.. El hecho de la detención fue reconocido y, con posterioridad, se informó que había sido puesto en libertad, sin embargo, hubo testigos que lo vieron en Isla Quiriquina; aquel permanece desaparecido desde el día de su detención, perdiéndose todo rastro suyo hasta la fecha, sin que el privado de libertad haya tomado contacto con sus familiares, realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción.”

Noveno: Que los hechos expuestos precedentemente fueron calificados en primera instancia como constitutivos de delitos de secuestro calificado de L.A.A. y A.V.V., previsto y sancionado en el [artículo 141 inciso 3°](#) del [Código Penal](#), asignándose a H.O.R.J. la calidad de autor del delito en la persona de A.A. y a J.L.A.V. la misma calidad, respecto del delito cometido en perjuicio de V.V..

Sin embargo, al emitir pronunciamiento respecto de los recursos deducidos contra el aludido fallo, la Corte de Apelaciones de Santiago modificó la calificación jurídica asignada al delito atribuido a H.R., sobre la base de estimar que la privación de libertad de A.A. presentó dos etapas que dan origen a hechos y delitos distintos, siendo estos primeramente el de detención ilegal contemplado en el [artículo 148](#) del [Código Penal](#), efectuada por los funcionarios de Carabineros en la localidad de Coelemu el 30 de abril de 1974, momento en el cual intervino el acusado ya referido, pues esta víctima fue detenida por personal de Carabineros en forma pública, actuando en tal calidad aunque infundadamente, siendo el afectado trasladado a la respectiva unidad policial y mantenido detenido en ella hasta ser trasladado posteriormente a la Cuarta Comisaría de Concepción y entregado al personal de ésta, lugar en el cual se le mantuvo encerrado, sujeto a duros interrogatorios y tormentos hasta producirse su desaparición forzada, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de su destino final, hecho este último que configura el delito de secuestro calificado, previsto en el artículo 141 del Código precitado, por lo que al haber intervenido R.J. en la forma descrita en primer término, corresponde atribuirle la calidad de autor que describe el [artículo 15](#) N° 1 del [Código Penal](#) en la detención ilegal de la víctima referida.

Décimo: Que en lo que respecta a la situación de A.V., la Corte de Apelaciones hizo suyos los razonamientos de primer grado que desestimaron una pretensión en el mismo sentido – estimar los hechos como constitutivos del delito de detención ilegal – porque “en el delito de secuestro se sanciona a quien, sin derecho, encerrase a otro privándole de su libertad; ahora bien, “sin derecho” involucra una infracción substancial al régimen de detención, importa una absoluta falta de legalidad en la detención o encierro, una ausencia de motivación suficiente; en cambio, la institución de la detención o arresto, contemplada en el [artículo 148](#) del [Código punitivo](#), es de naturaleza jurídica con fines y contenidos precisos y predeterminados,

reglamentados en los artículos [251 a 272](#), [278](#) y [280 a 305](#) del [Código de Procedimiento Penal](#); por ende, la detención inmotivada, "sin derecho", transforma el ilícito en un secuestro y aunque la detención o encierro la realice un sujeto investido de autoridad, cual sería el caso de... Abello... pero carente de legitimidad para llevarlo a cabo, se ejecuta un delito de secuestro. Además, en la especie, hubo restricción de la libertad ambulatoria de varias personas, sin justificación jurídica alguna, ni orden competente, con fines ajenos a las labores propias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad." (fundamento 59° de primera instancia), agregando que no se demostró en autos el aserto de la defensa, en el sentido que A. tenía facultades para detener.

Undécimo: Que en lo que atañe a los recursos deducidos por el Programa de Continuación de la [Ley N° 19.123](#) del Ministerio del Interior y por la parte querellante, en que se alegó la errónea calificación del delito, conviene recordar que nuestro legislador presupone en el denominado delito de detenciones ilegales que el funcionario actúa con un móvil concordante con la función pública que debe desarrollar y de un modo, aunque ilícito, no del todo contradictorio con el ordenamiento jurídico. Entonces, lo lógico es concluir que el tipo de detención ilegal verificado por un funcionario es equivalente a la figura privilegiada concedida al particular que detiene a alguien para presentarlo ante la autoridad y que reprime el artículo 143 del mismo cuerpo legal.

En razón de lo anterior, esta Corte ha sostenido que, los casos en que no concurren los requisitos que hacen procedente el privilegio corresponden a la conducta genérica de privación de libertad; o dicho de otro modo, la sanción aplicable al funcionario depende del tipo realizado por su actuación, que puede ser tanto el especial, descrito en el referido artículo 148, como el común castigado en el artículo 141 del mismo texto, según el siguiente supuesto disyuntivo: a) cuando es posible reconocer en el acto del funcionario una suficiente conexión con el legítimo sistema de vulneración de la libertad de las personas, el derecho penal le otorga un trato más benigno con el tipo especial privilegiado del artículo 148; o, b) de lo contrario, la acción que el funcionario realiza es la del tipo común de privación de libertad consagrada en el artículo 141, ya sea su hipótesis genérica o cualquiera de las figuras calificadas, como ocurre en el presente caso. Para discernir el tipo penal donde debe insertarse la conducta del inculpado, es útil precisar que el funcionario no sólo debe actuar guiado por un interés en la cosa pública, sino que su intervención debe probar también objetivamente un importante grado de congruencia o conexión con el régimen o procedimiento regular de privación de la libertad individual. ([SCS N° 1427-05](#), de veinticuatro de enero de dos mil siete y N° 1790-2014 de cuatro de septiembre de dos mil catorce).

Duodécimo: Que, asentados los parámetros de análisis del asunto, resulta claro que los hechos de la causa referidos a las víctimas L.A.A. y A.V.V. encuadran en la figura típica del [artículo 141](#) del [Código Penal](#), esto es, de secuestro. Ello, por cuanto es indiscutible que las víctimas fueron privadas de libertad por parte de funcionarios de Carabineros, siendo ilegítimo su proceder desde su comienzo, dada la inexistencia de una disposición judicial que ordenara su traslado a la unidad policial de Penco, en el caso de V. y a la de Coelemu y posteriormente a la cárcel de T., en el caso de

A., aumentando el disvalor de la conducta al permitir su traslado a otros lugares de detención, como la Isla Quiriquina (Villegas) o la Comisaría de C. (Acevedo), sin dar noticia a las autoridades de la aprehensión practicada, estado que se mantiene hasta el día de hoy al ignorarse sus respectivos paraderos. De esta suerte, no se advierte una mínima conexión del actuar de los procesados con el legítimo sistema de vulneración de la libertad de las personas, de manera que no resulta procedente otorgarles el trato más benigno contemplado en el tipo especial privilegiado del [artículo 148](#) del [Código Penal](#).

Décimo tercero: Que, en las condiciones descritas, aparece que los sentenciadores de segundo grado, al modificar el fallo de primera instancia en cuanto calificó los hechos perpetrados por H.R.J. como constitutivos del delito de secuestro estableciendo, de contrario, que encuadran en el tipo de detención ilegal, incurrieron en un error de derecho que influye sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, desde que la modificación de la calificación jurídica de los presupuestos fácticos significó la imposición de una pena inferior a la que correspondía aplicar al acusado, motivo por el cual los recursos de casación deducidos por el Programa de Continuación de la [Ley N° 19.123](#) del Ministerio del Interior y por la parte querellante serán acogidos.

Décimo cuarto: Que, por consiguiente, los razonamientos precedentes permiten concluir que los jueces del fondo no han incurrido en error de derecho al desestimar la pretensión del condenado A.V. de ver reconducida su conducta a la figura privilegiada de la detención ilegal, de manera que carecen de relevancia para la subsunción de los hechos acreditados en el tipo penal correspondiente tanto la investidura del acusado, como el momento en que cesa su contribución a los hechos, ya que tales factores, de acuerdo a los razonamientos vertidos, no permiten la aplicación de la figura penal más benigna, siendo de otro orden las consideraciones que se han de tomar en cuenta para su aplicación, ninguna de las cuales ha sido demostrada en autos.

En cuanto al recurso de casación deducido contra la decisión civil de la sentencia de segunda instancia:

Décimo quinto: Que, a su turno, el Consejo de Defensa del Estado denunció, a través de su recurso de casación en el fondo, violación de los [artículos 17 a 27](#) de la [Ley 19.123](#), en relación a los artículos [19](#) y [22](#) del [Código Civil](#), porque se concedió a la parte demandante una indemnización, en circunstancias que ya había sido indemnizada por el mismo hecho, al haber sido resarcida con los beneficios de la ley citada, esto es, la bonificación compensatoria y pensión mensual de reparación así como beneficios sociales, lo que ya ha satisfecho las pretensiones o indemnizaciones aquí reclamadas. En segundo término, denuncia que lo resuelto infringe los [artículos 41](#) del [Código de Procedimiento Penal](#), 2332, 2492, 2497 y 2514 del [Código Civil](#), todos ellos en relación a los artículos 19 y 22 inciso 1º de ese mismo cuerpo normativo, lo que se produjo al haberse dejado de aplicar al caso concreto las normas de derecho interno sobre prescripción, conforme a las cuales el término de prescripción de las acciones civiles indemnizatorias aplicable es de 4 años. Expresa que es un hecho que la detención de la víctima se produjo el 30 de

abril de 1974 y que la demanda se notificó el 15 de enero de 2010, de modo que se dejó de aplicar la norma en estudio y, a consecuencia de ello, lo mismo ocurrió con los artículos [2497](#) y [2492](#) del [Código Civil](#) que ordenan la procedencia de las reglas de la prescripción contra el Estado y como regla general. Lo mismo sucede con el artículo 2514 de ese cuerpo normativo, que sólo exige el transcurso del tiempo para que tenga lugar la prescripción.

Aduce el recurrente que el error de derecho se comete porque los jueces desatendieron el claro sentido que emana del tenor literal de las disposiciones legales citadas, lo que también importa una infracción a las normas de interpretación del [artículo 19 inciso 1º](#) del [Código Civil](#), denunciando la falsa aplicación de las normas de derecho internacional sobre derechos humanos que no prevén la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales. Sostiene que la sentencia extendió la imprescriptibilidad prevista para el ámbito penal en derechos humanos a los aspectos civiles que se han entregado a la regulación del derecho interno y que significa además, una grave confusión de categorías jurídicas, ya que no hay disposiciones concretas que avalen la imprescriptibilidad en materia civil, efecto que tampoco está establecido en ningún tratado internacional ni reconocido en principios de derecho internacional o ius cogens. Indica que la base del error radica en considerar que todas las acciones derivadas de los crímenes de guerra o de lesa humanidad, sean civiles o penales, deben tener el mismo tratamiento en lo que respecta a su extinción por prescripción. Sin embargo, la responsabilidad civil y penal, aunque relacionadas, son diferentes, lo que refuerza, repasando aspectos que avalarían su tesis, todo lo cual le permite solicitar, para el caso de acoger el recurso deducido, la anulación de la sentencia impugnada y que se dicte en su lugar una que rechace la demanda de indemnización de perjuicios deducida en autos.

Décimo sexto: Que al respecto, cabe considerar que toda la normativa internacional aplicable en la especie por mandato constitucional, que propende a la reparación integral de las víctimas, ciertamente incluye el aspecto patrimonial. En efecto, en autos se está en presencia de lo que la conciencia jurídica denomina delito de “lesa humanidad”, calificación que no sólo trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el ilícito, declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que además, la inviabilidad de proclamar la extinción - por el transcurso del tiempo - de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado.

Así entonces tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos - integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del [artículo 5º](#) de la [Carta Fundamental](#) - que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, por lo que resulta contrario a derecho declarar prescrita la acción intentada por la actora contra el Estado de Chile.

Como consecuencia de lo explicado, no resulta aplicable la normativa interna del

[Código Civil](#), cuyo diseño y redacción no es propio a la naturaleza de los hechos indagados en este proceso y que, como ya se adelantó, corresponden a un delito de lesa humanidad, por lo que no es posible sujetar la acción civil indemnizatoria a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna como reclama el representante del Fisco. Se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función pública, en que éstos, durante un período de extrema anormalidad institucional representaban al gobierno de la época, y en que -al menos en el caso de autos- claramente se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como el que aquí se estudia, por lo que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda de jure. A lo anterior lo obliga el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes, como ocurre por ejemplo y entre otros, con la propia Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado

(Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, H.N.A., Las Constituciones Latinoamericanas, página 231).

De esta forma, el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna, conforme a lo dispuesto en el [artículo 5º](#) de la [Constitución Política](#) de la República que señala que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.

El [artículo 6º](#) de la misma [Carta Fundamental](#), al igual que la disposición antes referida, forma parte de las “Bases de la Institucionalidad” -por lo que es marco y cimiento del ejercicio de la jurisdicción- y ordena que “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”, indicando el deber categórico que se le impone al tribunal nacional a descartar la aplicación de las normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución. El mismo [artículo 6º](#) enseña que “los preceptos de esta [Constitución](#) obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”, y concluye señalando que “la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”.

De este modo, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el [Código Civil](#) sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, invocadas por el Fisco de Chile, al estar en contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile.

Décimo séptimo

Que en cuanto a la alegación del Fisco de Chile para que se declare improcedente la indemnización por daño moral que se ha demandado en razón a que de conformidad con la [Ley N° 19.123](#) los actores obtuvieron bonificación compensatoria, pensión mensual de reparación y otros beneficios sociales, los cuales, por los motivos que señala, serían incompatibles con toda otra indemnización, tal alegación debe ser igualmente rechazada, por cuanto la ley citada que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación concede pensión de reparación y otorga otros beneficios a los afectados, pero no establece de modo alguno tal incompatibilidad, sin que sea procedente suponer aquí que la referida ley se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de los derechos humanos ante la evidencia de que las acciones para obtener aquello se encontrarían a la fecha prescritas. Se trata en consecuencia de dos formas distintas de reparación y que las asuma el Estado -voluntariamente en aquel caso- no importa de modo alguno la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare, por los medios que autoriza la ley, su procedencia. Al efecto, el propio [artículo 4°](#) de la [ley N° 19.123](#), refiriéndose, en parte, a la naturaleza y objetivos de la misma, expresa que “En caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiese caber a personas individuales.

Si en el cumplimiento de sus funciones la Corporación tuviere conocimiento de hechos que revistan caracteres de delito, deberá ponerlos, sin más trámite, en conocimiento de los Tribunales de Justicia”;

Décimo octavo

Que, en consecuencia, no se han producido los errores de derecho denunciados en tal recurso, por lo que también será desestimado

Por estas consideraciones y visto, además, lo preceptuado en los artículos [500](#), [535](#), [541](#) N° 6 y 9°, 544, 546 y 547 del [Código de Procedimiento Penal](#), 775 y 778 del [Código de Procedimiento Civil](#), se resuelve que:

- I. se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la defensa del condenado J.A.V. en la presentación de fojas 4437
- II. Se rechaza, asimismo, el recurso de casación en el fondo formalizado en representación del Fisco de Chile a fojas 4486.
- III. Se acogen los recursos de casación en el fondo deducidos a fojas 4382 y 4529 por la parte querellante y por el Programa Continuación [Ley 19.123](#), respectivamente, en contra de la sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil catorce, escrita a fojas 4373 y siguientes, sólo en su sección penal, la que se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Cisternas.

Rol N° 932-2015

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Milton Juica A., Hugo Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., Haroldo Brito C. y Lamberto Cisternas R. No firman los Ministros Sres. Juica y Künsemüller, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y en comisión de servicios, respectivamente.

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a veinticuatro de agosto de dos mil quince, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al señor F.J. de la Corte Suprema, quien no firmó.